



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ D.C.

Bogotá D.C., nueve (9) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

RADICACIÓN: 11001-33-35-012-2019-00488-00
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DEMANDANTE: ROSABEL CAICEDO CASTILBLANCO
DEMANDADO: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

En el presente asunto, **ROSABEL CAICEDO CASTILBLANCO**, promueve demanda en el ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en contra del **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**, con la finalidad de obtener: 1) nulidad de los artículos 1º, 7º y 8º de la resolución RDP 012496 del 12 de abril de 2019, por medio de la cual la UGPP, reliquidó pensión de vejez en cumplimiento de un fallo judicial; y 2) la nulidad de la resolución RDP 014210 del 8 de mayo de 2019, por medio de la cual se modificó el artículo 1º de la resolución RDP 012496 del 12 de abril de 2019.

Pues bien, analizado el escrito introductorio, se observa que no es posible en este momento dar trámite a la demanda presentada, teniendo en cuenta las siguientes,

CONSIDERACIONES

El Capítulo III de la Ley 1437 de 2011, consagra los requisitos que deben reunir las demandas, y para el efecto el artículo 162 dispuso:

“Artículo 162 Contenido de la Demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:

- 1.** La designación de las partes y sus representantes.
- 2.** Lo que se pretenda, expresando con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado, con observancia de lo dispuesto en este mismo Código para la acumulación de pretensiones.
- 3.** Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, debidamente determinados, clasificados y numerados.

4. Los fundamentos de derecho de las pretensiones. Cuando se trate de la impugnación de un acto administrativo deberán indicarse las normas violadas y explicarse el concepto de su violación.
5. La petición de las pruebas que el demandante pretende hacer valer. En todo caso, este deberá aportar todas las documentales que se encuentren en su poder.
6. La estimación razonada de la cuantía, cuando sea necesaria para determinar la competencia.
7. **El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, podrán indicar también su dirección electrónica.”**

Así mismo, el artículo 166 ibídem, señaló que la demanda debe venir acompañada, entre otros, de la copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, de los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, y las copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público.

Visto esto y al realizar una revisión de tales requisitos, se pudo establecer que la demanda y los anexos, no cumplen con la totalidad de estos, como se indica a continuación:

1. De las pretensiones

Revisado el escrito introductorio se tiene que las pretensiones, son:

- “1) nulidad de los artículos 1º, 7º y 8º de la resolución RDP 012496 del 12 de abril de 2019, por medio de la cual la UGPP, reliquidó pensión de vejez en cumplimiento de un fallo judicial.
- 2) la nulidad de la resolución RDP 014210 del 8 de mayo de 2019, por medio de la cual se modificó el artículo 1º de la resolución RDP 012496 del 12 de abril de 2019.
- 3) Que como consecuencia de la anterior declaración y a título de RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO se ordene la expedición ajustada en Derecho de la Resolución que liquide, reconozca y pague la reliquidación de la pensión post mortem de Mauro Rey Pardo (Q.E.P.D.) y a favor de ROSABEL CAICED CASTILBLANCO beneficiaria de la pensión de sobrevivientes legalmente reconocida. Reliquidación que debe hacerse desde el 4 de agosto de 2011 al 31 de mayo de 2019, y se compensen los descuentos de aportes que ya fueron descontados de manera arbitraria e ilegal de las mesadas pensiones de las nominas de junio de 2019 en adelante, cuyo monto total asciende a la suma de \$15.549.934.
4. Condenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, a que si no da cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 numeral 2º del CPACA, pague en favor de mi mandante intereses moratorios después de este término conforme lo ordena el inciso 3º del mismo artículo y numeral 4º del artículo 195 del CPACA.
5. Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL-UGPP, a que

*dé cumplimiento al fallo dentro del término previsto en el artículo 192 numeral 2º del CPACA.
(...)”*

Los actos administrativos cuya nulidad se solicitan son:

1- Resolución RDO 012496 del 12 de abril de 2019, *“por la cual se reliquida una pensión vejez postmortem en cumplimiento de un fallo judicial proferido por el tribunal administrativo de Cundinamarca sección segunda subsección f de rey pardo mauro”*. Fallo emitido por este Despacho el 17 de octubre de 2017, que fue confirmado por el H. Tribunal de Cundinamarca el 23 de noviembre de 2018.

2- Resolución RDP del 8 de mayo de 2019, *“por la cual se modifica la resolución No. RDP 01496 del 12 de abril de 2019 del Sr (a) REY PARDO MAURO, con CC No. 17,044,121”*, reliquidación pensional reconocida a favor de la señora Rosabel Caicedo Catiblanco, en ocasión al fallecimiento del señor Mauro Pardo Rey.

Al respecto, en cuanto a los actos administrativos que se pueden demandar ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, se debe tener en cuenta en primer lugar, que la Ley 1437 de 2011, en su artículo 43, señala que *“Son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación.”*.

Para explicar lo anterior, vale recordar que la doctrina y la jurisprudencia han señalado la existencia de varias clases de actos administrativos, a saber, los actos de trámite o preparatorios, los definitivos y los de ejecución, sin embargo, no todos son susceptibles de ser demandables ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para estudiar su legalidad, pues para ello deben contar con una condición *“sine qua non”*, y es que **creen, modifiquen o extingan una situación jurídica**.

En otras palabras, si los actos administrativos no son definitivos, es decir, si no contienen la manifestación de la voluntad de la administración con la cual se culmine con el procedimiento administrativo ante la entidad respectiva, tal como lo define el artículo 43 del C.P.A.C.A., no pueden demandarse bajo los medios de control que consagra la Ley 1437 de 2011.

Al respecto, el Consejo de Estado – Sección Segunda, en proveído adiado 25 de mayo de 2017, dentro del expediente 2012-00400, C.P. Dr. CARMELO PERDOMO CUÉTER, hizo alusión a esta diferenciación entre las clases de actos administrativos, indicando lo siguiente:

*“Se ha entendido el acto administrativo como la manifestación de voluntad de la administración, en ejercicio de la función administrativa, orientada a producir efectos jurídicos que crean, modifican o extinguen una situación jurídica, y, por ende, susceptible del control jurisdiccional. También puede ser impugnado en sede administrativa a través de los recursos de la vía gubernativa o por revocación directa. Sobre este último aspecto, los artículos 49 y 50 del Código Contencioso Administrativo (CCA) establecen que «No habrá recursos contra los actos de carácter general, ni contra los **de trámite, preparatorios, o de***

ejecución excepto en los casos previstos en norma expresa» y «Por regla general, contra los actos **que pongan fin a las actuaciones administrativas** procederán los siguientes recursos: [...] Son **actos definitivos**, que ponen fin a una actuación administrativa, los que deciden directa o indirectamente el fondo del asunto; los actos de trámite pondrán fin a una actuación cuando hagan imposible continuarla» (negritas no son de los textos).

En este sentido, ha de comprenderse que el **acto de trámite** es aquel que no le pone fin a una actuación administrativa o asunto, sino que tiende a impulsarla hasta su culminación, mientras que el **definitivo** la resuelve de fondo y la termina.¹ [...]"

Ahora bien, frente a los actos de ejecución la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido uniforme en indicar que los actos administrativos de ejecución no son susceptibles de control jurisdiccional, salvo que éstos creen una situación nueva.

Sobre el concepto de los actos de ejecución la Sección Primera del Consejo de Estado, precisó:

*"[...] El acto de ejecución, por el contrario, aunque es unilateral también y proferido en desarrollo de dicha función, no crea, modifica o extingue situación jurídica alguna, pues el efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de la ejecución, de ahí que no sea pasible de control ante el juez. El acto de ejecución, en síntesis, plasma en el mundo material o jurídico, según sea el caso, el contenido del acto administrativo, dándole efectividad real y cierta [...]"*²

En el mismo sentido, según lo ha indicado la Corte Constitucional, los actos de ejecución se caracterizan por:

*"[...] (i) no admitir recursos en vía gubernativa; (ii) en caso de que causen perjuicio al administrado, éste podrá accionar conforme a las reglas de control de los actos administrativos, contenidas en la parte segunda del Código Contencioso Administrativo; y (iii) su naturaleza dependerá de su configuración, fines y efectos, con prescindencia de la denominación que le acuerde la administración. En este orden de ideas, como regla general, frente a los actos de ejecución de las sentencias no procede recurso alguno en vía gubernativa ni control judicial; [...]"*³

De todo lo anterior se concluye que únicamente las decisiones de la administración que concluyen un procedimiento administrativo o aquellos que afecten derechos o intereses, o impongan cargas, sanciones y obligaciones que afectan o alteran situaciones jurídicas determinadas, son susceptibles de control por parte de esta jurisdicción, de ahí que los que impulsan la actuación, los que se limiten a dar cumplimiento a una orden judicial o administrativa, no son cuestionables vía judicial.

¹ Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección quinta, sentencia de 22 de octubre de 2009, radicación número: 11001-03-28-000-2008-00026-00; 11001-03-28-000-2008- 00027-00, consejero ponente: Filemón Jiménez Ochoa, actor: Camilo Araque Blanco y otros.

² Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Guillermo Vargas Ayala, 14 de agosto de 2014, radicación núm.: 25000 2324 000 2006 00988 01, Actor: ISAGEN E.S.P.

³ Corte Constitucional, en sentencia T-923 de 2011.

En este orden de ideas, al analizarse el acto administrativo que se censura en el presente asunto, es claro para el Despacho que se trata de un acto ejecución, no susceptible de control jurisdiccional, por lo siguiente.

El artículo 278 del Código General del Proceso, establece los tipos de providencias que se profieren en el curso de los procesos judiciales, bajo el siguiente contenido normativo:

“Artículo 278. Clases de providencias. *Las providencias del juez pueden ser autos o sentencias.*

Son sentencias las que deciden sobre las pretensiones de la demanda, *las excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son autos todas las demás providencias.”*

Los actos administrativos Resolución RDO 012496 del 12 de abril de 2019, y Resolución RDP del 8 de mayo de 2019, objeto de demanda, fueron expedidos por la demandada como consecuencia de una sentencia judicial proferida por este Despacho dentro del proceso 2015-00578-00, el día 17 de julio de 2017. Sentencia que fue confirmada por el H. Tribunal de Cundinamarca el 23 de noviembre de 2018. Dichos actos administrativos, proferidos como consecuencia de sentencia judicial, resuelven:

“ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por TRIBUNAL CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION F el 23 de noviembre de 2018, y en consecuencia reliquidar el pago de una pensión de vejez postmortem en cuantía de \$348,389 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) con ocasión del fallecimiento de REY PARDO MAURO efectiva a partir del 8 de febrero de 1996, con efectos fiscales del 4 de agosto de 2011 por prescripción trienal según la siguiente distribución:

*Solicitante: CAICEDO CASTILBLANCO ROSABEL
(...)”⁴*

“ARTICULO PRIMERO: Modificar la parte motiva de pertinente y el artículo primero de la Resolución No. RDP 102496 del 12 de abril de 2019, en el siguiente sentido:

“ARTICULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por TRIBUNAL CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA SUBSECCION F el 23 de noviembre de 2018, y en consecuencia reliquidar el pago de una pensión de vejez postmortem en cuantía de \$348,389 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE) con ocasión del fallecimiento de REY PARDO MAURO efectiva a partir del 8 de febrero de 1996, con efectos fiscales del 4 de agosto de 2011 por prescripción trienal según la siguiente distribución:

⁴ Resolución RDO 012496 del 12 de abril de 2019

Solicitante: CAICEDO CASTILBLANCO ROSABEL.

PARAGRAFO: La sustitución pensional a favor de la solicitante CAICEDO CASTILBLANCO ROSABEL, ya identificada, se reconoce a partir del 21 de enero de 2018, día siguiente al fallecimiento del causante, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo.”⁵

De lo anterior se concluye que, los actos acusados constituyen un acto administrativo de ejecución, que no es pasible del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en los términos expuestos en la demanda, pues los mismos fueron la concreción de la orden impartida por este Despacho, ordenando la reliquidación de la pensión de vejez en los parámetros descritos en la Orden Judicial.

Ahora, si bien el Consejo de Estado a estipulado que en los casos en que los "actos de ejecución" excedan, parcial o totalmente, lo dispuesto en la sentencia o en el acto administrativo ejecutado, es procedente ejercer control de legalidad frente al mismo, en el presente caso, no se vislumbra dicho escenario.

Debe recordar el Despacho a la parte activa, que dentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo existen otro tipo de mecanismos o acciones judiciales a efectos de hacer efectivas en su totalidad las sentencias proferidas por los jueces administrativos y solicitar los intereses moratorios, por su no cumplimiento y/o pago, de que trata el artículo 192 del C.P.A.C.A.

Corolario de lo anterior, es del caso rechazar la demanda, pues el acto acusado no contiene una decisión definitiva que permita a este estrado judicial realizar el control de legalidad que se pretende, y en este evento el artículo 169 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, dispone en su numeral 3° que se rechazará la demanda “*Cuando el asunto no sea susceptible de control judicial.*”

En virtud de lo anterior, el Despacho,

RESUELVE

PRIMERO.- RECHAZAR LA DEMANDA instaurada por **ROSABEL CAICEDO CASTILBLANCO**, contra del **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL**, por las razones expuestas en este proveído.

SEGUNDO.- Ejecutoriada la presente providencia, previas las anotaciones a que haya lugar, devuélvanse a la parte demandante los anexos sin necesidad de desglose y a través de la Oficina de Apoyo procédase al archivo correspondiente

⁵ Resolución RDP del 8 de mayo de 2019

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

CA



**JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. SECCIÓN SEGUNDA**

Por anotación en **ESTADO ELECTRÓNICO** notifico a las partes
la providencia anterior hoy **10 DE FEBRERO DE 2021**, a las
ocho de la mañana (8:00 a.m.)

Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO**

JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-CUNDINAMARCA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez
jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario
2364/12

Código de verificación:

**6401379a07e154d9062e1ac45c3ac3265925f19075685c3ad2623048f07827
99**

Documento generado en 09/02/2021 10:14:55 AM

Valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>